Balance

Honduras 2004

Desde nuestra fundación, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha asumido con mucha responsabilidad nuestra labor de investigación, propuesta y de formación crítica desde la base de la ciudadanía ante los diversos problemas que enfrenta el país a partir de su condición de pobreza e inequidad.

En ese sentido, este año publicamos, a través de este suplemento, un resumen de los principales hechos, con sus respectivas consecuencias, que marcaron la vida Honduras durante el 2004. Asimismo, presentamos un esbozo de los principales desafíos del país para el 2005.

Las valoraciones críticas que presentamos en este trabajo, están escritas con el único objetivo de seguir propiciando un debate abierto y constructivo sobre las acciones y decisiones que se toman en el país y que afectan la vida de la población.

Sabemos que objetar a las actuaciones de las autoridades o a los sectores de ciudadanía con poder económico y político no es una práctica común en el país y que muchas veces trae consecuencias negativas a nivel institucional y hasta personal, pero en el FOSDEH estamos consientes de que el país no aguanta más pobreza, más injusticias y más saqueo y que estas acciones antes que tolerarlas, hay que denunciarlas y trabajar para superarlas.

Nuestro **“Balance Honduras 2004”** recalca indicadores de pobreza que señalan que aproximadamente dos millones y medio de personas sobreviven con un dólar diario, en contraste con los diez mil millones de lempiras, como mínimo, que se pierden anualmente en manos de la corrupción.

Planteamos lo inequitativas que resultan las negociaciones internacionales que actualmente lleva a cabo el gobierno, como es el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o lo complacientes que se ha sido con las imposiciones, económicas y políticas, de Organismos Financieros Internacionales y de otros gobiernos.

Sin embargo, el manejo económico del país y sus repercusiones a nivel social y democrático ha sido sin lugar a dudas nuestro principal quehacer en el

2004, señalando que no existe la recuperación económica pregonada y mucho menos un mejoramiento en las condiciones de vida de los hondureños y hondureñas.

Si los indicadores macroeconómicos han presentado una cierta mejoría lo son, fundamentalmente, por el aumento de las remesas familiares procedentes de los hondureños que viven en EEUU, o por inversiones en áreas específicas como telecomunicaciones, turismo o la exportación de productos no tradicionales, nunca por el mejoramiento de la economía familiar, la cual en el 2004 se vio seriamente afectada por el alza a los precios de los combustibles.

En resumen, lo que presentamos en este suplemento, es una versión más amplia y objetiva de la Honduras que tenemos hoy, y que en el presente año sucumbe a una fiebre política - partidaria, que dejarán nuevas autoridades para el país, pero no necesariamente será un fortalecimiento a la democracia.

Esperamos que las opiniones y planteamientos del FOSDEH puedan ayudar a la ciudadanía a entender de mejor manera la dinámica del país y prepararse para los nuevos desafíos y extender los brazos de manera más solidaria para sacar a flote al país donde todos y todas vivimos.

Mauricio Díaz Burdett
Coordinador del FOSDEH

FOSDEH
FORO SOCIAL DE DEUDA EXTERNA
Y DESARROLLO DE HONDURAS

Col. Alameda, Ave. Tiburcio Carías Andino
Casa No. 1011, Apdo. Postal 1248, Tegucigalpa, Honduras
Tel/fax: (504) 239-2110
Correo electrónico: fosdeh@cablecolor.hn
Página web: www.fosdeh.net

Este suplemento fue publicado gracias
al apoyo de **DIAKONIA** y **OxfamUK**

Sobrevalorar la economía en tiempos de crisis

Mientras el Gobierno sostiene que cierra el 2004 con un exitoso balance económico, muchos ciudadanos hondureños sienten que la única salida a sus dificultades es emigrar rumbo al “norte”, y tienen razones para creerlo así.

Si vivir en Honduras es difícil, sobrevivir es más difícil aún. De acuerdo con la CEPAL, al menos siete de cada diez familias viven en la pobreza y cuatro de ellas en extrema pobreza, y ese no es un simple juego de palabras.

La extrema pobreza es marginalidad absoluta y bajo esa condición se encuentran unos dos millones de personas que reciben ingresos menores a los dos dólares diarios. Para ellos, los indicadores oficiales de que la crisis económica está quedando atrás no son creíbles.

Desde que el ex presidente Rafael Leonardo Callejas inició en 1990 el Programa de Ajuste Estructural, cada año las autoridades hacen la misma promesa de que lo mejor está por venir, pero ni siquiera las metas comerciales se han logrado cumplir, mucho menos las metas sociales.

Según el reporte del Banco Mundial conocido como “Doing Business in 2005” (Eliminando Obstáculos para el Crecimiento), Honduras ocupa el lugar 110 en grado de apertura de la economía, entre 145 países analizados. Ese es un puesto muy bajo comparado con el sacrificio invertido por la mayoría de la población.

El grado de apertura se mide por la calidad de los trámites o requisitos para crear una empresa, condiciones para hacer cumplir los contratos por medio de la justicia y la regulación laboral.

Hasta ahora, la ansiada inversión extranjera no llega. La inversión privada de capital foráneo en el 2003 sumó 198 millones de dólares y para el 2004 se estima que superará los 200 millones de dólares, especialmente por nuevas inversiones en la maquila, turismo, finanzas y servicios.

Al ritmo actual de la inversión, la promesa siempre estará alejada de la realidad. Lo mismo ocurre con las exportaciones, cada vez en mayor desventaja respecto a las importaciones. Este año la brecha comercial será de unos 1500 millones de dólares.

Algunos datos oficiales revelan un fracaso de fondo en el modelo, por ejemplo, las exportaciones a EEUU representaron en 1991 alrededor del 51% de la oferta comercial hondureña, y en el 2004 ronda 48%, es decir, que en lugar de crecer, decrece.

Quienes sí están invirtiendo y fuerte es el capital financiero centroamericano, con El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá disputándose el pastel hondureño.

Aunque pequeño, el mercado local tiene su atractivo en el ritmo de las ganancias y, sobre todo, en la visión estratégica alrededor de los recursos del país.

Vienen nuevos bancos, como el Cuscatlan (El Salvador), pero las tasas de interés siguen altísimas. La tasa de interés promedio del sistema bancario en el 2004 fue para el Lempira de 18.40% (activa) y 10.53% (pasiva) y en dólares de EEUU, de 7.36% (activa) y 2.66% (pasiva).

Los empresarios nacionales se quejan, con razón, de que es imposible invertir con la combinación actual de elevadas tasas de interés y cada vez más y voraces impuestos. Las principales fuentes de ingreso para el Fisco de Honduras provienen del Impuesto sobre Importación, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto sobre Producción y Consumo, Impuesto sobre Ventas y el Impuesto sobre la Renta. La recaudación fiscal representa ya el 18% del PIB y podría aumentar en el 2005.

Bajo esas condiciones, es justo dudar del informe que el Presidente Ricardo Maduro dio a la Nación en noviembre del año pasado y reiterado en enero del 2005, asegurando que en el 2004 “se ha logrado una estabilidad macroeconómica mediante la cual el sector externo alcanza un significativo crecimiento y diversificación de exportaciones...hay estabilidad cambiaria, control de la inflación y el nivel de reservas internacionales alcanza la suma de 1.476 millones de dólares”.

Según los datos gubernamentales el año culmina con un déficit fiscal de 3.5%, una inflación acumulada de 7.8% y un crecimiento económico de 4.3%, considerado por el Presidente Maduro como el “más alto de Centroamérica”.

Los ministros sostienen que la base del crecimiento del país es sólida, pero que hace falta reducir (vía condonación) el peso de la deuda externa para destinar parte de los recursos de su servicio a la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). El saldo oficial de la deuda externa pública de mediano y largo plazo ascendió este año a 4.785.2 millones de dólares, con un

incremento de 101 millones de dólares con respecto al 2003, y el servicio de la deuda también aumentó a 153.8 millones de dólares.

En términos generales, los datos oficiales, como siempre, apuntan a una recuperación económica que no reduce ni la inequidad ni la desigualdad social existente. Eso sí, el número de autos “Jaguar” rodando en las calles hondureñas es cada vez más elevado. ■

El panorama de fondo

Si Honduras cumpliera con las Metas del Milenio que suscribió en el año 2000, junto a 188 naciones más, para el 2015 tendrá que haber reducido a la mitad el número de personas que padecen de hambre en este país, y los niños y niñas en estado de desnutrición representarán 17.5%. Pero los avances no apuntan hacia esa dirección: de 1991 a 2001 la tasa de desnutrición en niños aumentó de 34.9 a 36.2%, y si la tendencia continúa, hacia 2015 habrá aumentado a 38.1%. (PNUD, 2003)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha concluido que considerando los actuales indicadores para Honduras, se requerirían 240 años para lograr las Metas del Milenio. (Morazán, Pedro, 2004)

En el 2004 la economía nacional, en particular la de las familias, sufrió un duro impacto con el alza en los costes del combustible. El Gobierno excusa la situación diciendo que el precio del crudo en el mercado internacional escapa de su control, lo cual es cierto, pero lo que no se admite es que el sacrificio se concentró en la mayoría de la población puesto que ni el Fisco ni los intermediarios redujeron sus ganancias, es más, el negocio resultó tan rentable que estimuló el mayor contrabando de gasolina que se registra públicamente (más de 500 millones de lempiras en defraudación), descubriéndose la implicación de altos funcionarios del Gobierno que, como siempre, parece que saldrán ilesos del escándalo.

(cont. El panorama de fondo)

La sangría es mayor si se toma en cuenta que en el 2004 la factura petrolera aumentó 20.9% respecto al 2003, fundamentalmente para sostener la generación de energía térmica y la multiplicación de estaciones gasolineras. Si se hace un estudio de los nuevos dueños de gasolineras, se verá que muchos son los mismos que venden la energía eléctrica.

Pero, en última instancia, si los indicadores macroeconómicos presentan cierta mejoría lo son, fundamentalmente, por el aumento de las remesas familiares procedentes de los hondureños que viven en EEUU, que superan los mil millones de dólares, a lo que se suma cierto repunte en la cotización internacional del café, el turismo y un incremento de la exportación de productos no tradicionales.

Honduras es un país remesa-dependiente. Si esos dólares no vinieran habría un desplome económico y social general. Por esa razón, el Estado facilita y promueve la expulsión de mano de obra, consciente que es su mejor negocio, pero, ¿lo es para el futuro de la nación?

Las consecuencias productivas, sociales y culturales negativas de la emigración masiva son constantemente advertidas desde organizaciones ciudadanas, pero no tomadas en cuenta por el Estado. Esos dólares, conseguidos muchas veces a costa de sangre y dignidad, no están promoviendo el desarrollo nacional, pero si aumentando la riqueza de quienes se lucran con la intermediación financiera. ■

¡Ahí vienen los chinos!

Hace muchos años, en plena “guerra fría”, se hizo muy popular una película que se llamaba “¡Ahí vienen los rusos!”, hoy el temor se volvió amarillo y desde la costa norte se escucha el grito de los maquiladores diciendo “¡ahí vienen los chinos!” y agitando ese temor están exigiendo más y más concesiones fiscales a un Estado que no tiene con qué afrontar sus responsabilidades.

Con los rusos el temor era ideológico, se trataba del “comunismo”, presentado como la gran amenaza para las “democracias”, pero con los chinos el asunto no es necesariamente ideológico, sino comercial y, en particular, textil.

Resulta que Honduras ha concentrado buena parte de su industria exportadora en el sector textil y del vestido, con muchas empresas ubicadas en las zonas maquiladoras, en su absoluta mayoría con producción destinada al mercado de EEUU.

Esa estrategia maquiladora, que se basó en explotar la mano de obra barata y la cercanía geográfica al mercado del norte, está ahora en grave riesgo puesto que en el 2005 caduca el sistema de cuotas de importación textilera en EEUU.

Las cuotas han favorecido a los países de la Cuenca del Caribe y, como lo señalan los datos, en especial a Honduras, que se convirtió en uno de los principales exportadores del rubro en América Latina y el mundo.

Las prendas de vestir “made in Honduras”, maquiladas para marcas famosas como GAP, Tommy, Lee y otras, se encuentran al alcance de los consumidores en EEUU y otras naciones.

La incertidumbre se introduce a partir de que la liberalización comercial prevista para el 2005 sea más favorable para productores de Asia, como China, India y Paquistán, y perjudicial para los latinoamericanos.

La irrupción china no es nueva; cada mes vende a EEUU productos equivalentes a miles de millones de dólares y esa cifra continúa creciendo.

¿Qué hacen los maquiladores afincados en Honduras para afrontar el desafío? En realidad, fortalecer la maquila, propiciando condiciones cada vez más y más atractivas para los inversionistas extranjeros.

Esa parece una buena noticia para los dueños de parques industriales, pero no es tan buena para las finanzas públicas y para la economía en general.

La maquila exige más privilegios fiscales para competir y la presión al respecto se hará más intensa a medida que su estrategia trate de vincularla más a otros sectores de la economía nacional.

Un reciente estudio del FMI ahondada sobre los beneficios fiscales de la maquila, apuntando que Honduras mantiene varios regímenes de promoción de exportaciones. El Régimen de Importación Temporal (RIT) permite la internación sin pago de arancel de los bienes destinados a la producción de bienes exportables.

El régimen de las Zonas industriales de Procesamiento (ZIP) otorga exenciones fiscales generales a empresas dedicadas en exclusiva a la exportación y ubicadas en parques industriales especialmente designados. Estas empresas, se asegura, gozan de la exención de aranceles y del Impuesto sobre la Renta por un período de 20 años y de impuestos municipales por 10 años. Obviamente, una empresa a la que se le va a vencer esos plazos, simplemente cierra y retorna con otro nombre o se va a donde le ofrecen lo que estará perdiendo.

También en el organigrama están las Zonas Libres (ZOLI) que benefician a empresas exportadoras que pueden ubicarse en cualquier parte del país, recibiendo el beneficio de la importación libre de aranceles y de la exención permanente de impuestos sobre la renta y municipales.

Finalmente, hay que incluir a las Zonas Agrícolas de Exportación (ZADE) que otorgan beneficios fiscales amplios a empresas que exportan productos agrícolas no tradicionales.

Con esos privilegios fiscales, sostienen los expertos, el crecimiento de la maquila no traerá incrementos en los ingresos públicos y menos aún si esos privilegios se amplían agitando en el horizonte el síndrome chino. ■

El Presupuesto del 2005: dinero a manos llenas

Con la sombra de incertidumbre y duda que proyecta todo año electoral, el Presidente Ricardo Maduro dispondrá en el 2005 de un Presupuesto de Ingresos y Egresos de unos 40 mil millones de lempiras, a los que se suman unos 35 mil millones más para las llamadas instituciones descentralizadas del Estado. Físicamente es una montaña de dinero cuya dimensión es difícil de imaginar para un ciudadano común y corriente, pero con la certeza de que en menos de doce meses esa suma se habrá esfumado.

Un análisis del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) confirmó que el presupuesto para el 2005 siguió la tendencia a crecer de años anteriores, lo cual contradice las políticas de austeridad que tanto las autoridades como los organismos financieros internacionales anuncian

Este año el incremento con respecto al del 2004 es de 13.8%, equivalente a un aumento absoluto de 4,768.5 millones.

Como siempre la mayor parte del presupuesto lo consumen los “gastos corrientes”, con sueldos y salarios en primer lugar, que representan 70% del total. Su crecimiento comparativo es de casi 20%.

Para decirlo en datos claros, la burocracia consumirá este año unos 15 mil millones de lempiras, unos tres mil millones más que lo gastado en el 2004. El objetivo propagandístico de reducir la denominada empleomanía pública no parece congruente con el gasto planificado.

Pese a ello, el Gobierno Central tiene como meta disminuir el número de empleados de las secretarías de Salud y Educación, dos áreas claves en la inversión social. El intento, si lo hace, presagia conflictos laborales de alta intensidad.

La otra partida de importancia en el presupuesto del gasto corriente corresponde a las transferencias que ocuparán en el 2005 aproximadamente 21% de los egresos, destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de varias instituciones descentralizadas,

incluyendo los gobiernos locales y cuotas de pago a varios organismos internacionales de financiamiento y asistencia técnica.

Dentro de esos pagos el servicio de la deuda externa es el más significativo, con 8,029 millones de lempiras programados, casi 300 millones más que en el 2004.

En el caso de los recursos asignados al Poder Ejecutivo, el equipo de economistas del FOSDEH, entre los cuales hay ex funcionarios de Gobierno que trabajaron en la preparación de presupuestos anuales, reparan en 601 millones de lempiras que son “partidas sin discriminar”, sin metas claras.

Si se habla de transparencia fiscal, esas partidas vagas debieran desaparecer puesto que, oficialmente, se supone que no existen asignaciones confidenciales o discrecionales.

Similar incertidumbre hay en otros rubros, con fondos multimillonarios encubiertos como “transferencias de capital”, cuyo desempeño e impacto sectorial debe ser estrictamente supervisado.

Reducir el margen de maniobra a la corrupción es vital para un país en el cual los recursos disponibles son cada vez más caros, pero no sólo eso, se trata de garantizar también una ejecución eficiente, renglón deficitario tradicionalmente para el Estado.

Los analistas sostienen que la administración Maduro presenta bajos, y hasta precarios, niveles de ejecución en la inversión de programas y proyectos, especialmente los sociales.

Un porcentaje significativo de recursos destinados a la Estrategia de Reducción de la Pobreza se mantiene inmóvil, lo cual supone una afrenta ante tantas necesidades sociales insatisfechas.

Lo peor, afirman los expertos, es que el dinero aprobado por los organismos internacionales de financiamiento que no ha sido ejecutado sigue devengando intereses como si ya estuvieran en operación. Por no desembolsar de acuerdo a lo programados los prestamistas penalizan al gobierno con comisiones imputables a los saldos insolutos. Se sabe quien paga el costo de esa ineficiencia, pero se desconoce si alguien asume esa responsabilidad.

En ese aspecto es prioritario fortalecer la capacidad de monitoreo y supervisión de la ejecución del presupuesto, pero ese sigue siendo un flanco débil debido al fracaso del Tribunal Superior de Cuentas y de otros organismos públicos especializados.

Finalmente, ante la pregunta de cómo se financiará un presupuesto tan grande como el aprobado para el 2005, las autoridades de Finanzas sostienen que no habrá nuevos impuestos o tasas, pero sí que la persecución fiscal se hará más severa y activa.

Un propósito de esa naturaleza debiera incluir un control efectivo a la evasión, elusión y el contrabando por todos los puestos aduaneros, pero el precedente de impunidad que rodea la importación ilegal de combustible denunciada a fines del 2004 no despier-ta optimismo. ■

Los pobres sosteniendo la economía

El Presidente Vitalicio del FOSDEH, Monseñor Oscar Andrés Cardenal Rodríguez, afirmó este año que “los pobres son los que están sosteniendo la economía de Honduras a través de sus remesas”, y tiene razón. El dinero enviado por los emigrantes latinoamericanos en EE UU está contribuyendo a la riqueza del país. Como promedio, el emigrante hondureño envía entre 100 y 200 dólares mensuales a sus familiares, con costos de transferencia que siguen siendo muy altos. Las propuestas de abaratar esos costos se multiplicaron en el 2004, pero no son un punto de interés para el Gobierno, que deja esa iniciativa “al libre mercado”. Los bancos hondureños y algunas cooperativas extendieron este año sus puntos de acopio de remesas en EEUU, pero esa agresiva y rentable política cambiaría no tiene ningún componente social o de derechos humanos. El FOSDEH estima que reducir las comisiones y las tasas de cambio de divisas aumentaría el flujo de dinero en efectivo. Pero ese debiera ser el primer paso de una estrategia que implica el fortalecimiento de cajas rurales que promuevan el desarrollo comunitario y familiar, estimulando su participación en los sistemas de financiamiento. El desafío es crear oportunidades para que los emigrantes inviertan en sus regiones a través de organizaciones sociales, como se planteó en occidente a través de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG).

Aunque la reducción de costos no llegara a materializarse, el flujo de divisas se incrementa año con año, a un ritmo calculado entre 7% y 10% anual. El monto de las remesas supera con creces los ingresos por las exportaciones de bananos, café, productos no tradicionales y maquila. Honduras ya recibe en remesas el equivalente a cinco veces más del monto de la inversión privada anual.

Complementando las remesas, la propuesta oficial para el crecimiento económico y el fomento del empleo en el 2004 siguió siendo el turismo, la maquila y minería. El gobierno cerró el 2004 suscribiendo un acuerdo para impulsar la explotación turística privada de la Bahía de Tela y algunas zonas naturales de reserva adyacentes. Para ello cambió de táctica y en lugar de enfrentar la derogación del artículo constitucional 107, optó por lograr una resolución de la Corte Suprema de Justicia que autoriza la venta a capital extranjero de cualquier tierra susceptible al turismo, incluyendo las playas.

Al mismo tiempo se aceleró la firma de tratados comerciales de libre comercio, especialmente con EEUU, Chile y la Unión Europea. El caso del TLC o CAFTA ocupa el primer lugar de las prioridades oficiales y también de las preocupaciones sociales.

Lo que el Ministerio de Economía, los maquiladores y el Presidente Maduro sostienen es que Honduras tiene que aprobar el TLC porque “no existe otra salida”, pero el costo de hacerlo puede significar la firma de un acta que reduzca el país a plataforma de inversionistas que sólo buscan mano de obra barata, indefensa y recursos naturales.

Para el FOSDEH, la búsqueda de nuevos mercados es indispensable en la economía globalizada de hoy, pero no de la manera en que se plantea ahora. El problema es que el tratado, como está consumado, no es más que un anexo al Consenso de Washington de 1992 y que ya probó su fracaso.

Las perspectivas de país, en ese contexto, no son optimistas, pero ¿cuándo han sido optimistas?

ERP: una sociedad imaginada, cada vez más incierta

La Estrategia de Reducción de Pobreza (ERP) de Honduras fue aprobada por el Gobierno de la República y por los directorios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) el año 2002, con una visión de largo plazo hacia el 2015. Hasta el cierre del 2004, esa estrategia sigue esperando, para ejecutarse, los recursos externos prometidos por la vía de una condonación parcial del servicio de la deuda externa que se va haciendo cada vez más lejana e incierta.

Ahora mismo está en duda si los directorios del FMI y el Banco Mundial aprobarán el Punto de Culminación en marzo o esperarán para el 2006, bajo la justificación de que el proceso electoral y el recambio de gobierno no generan estabilidad ni confianza macroeconómica.

En todo caso se diluye cada día la posibilidad de que se cumpla el objetivo fundamental de la Estrategia de reducir 24% de la tasa de pobreza entre el período 2001-2015, lo que se esperaba lograr mediante un crecimiento económico acelerado, sostenido y equitativo.

Bajo las actuales condiciones de país el nivel de desarrollo del capital humano sigue precario, incluyendo el fortalecimiento de las redes de protección social.

Oficialmente, los números de las previsiones oficiales aguantan con todo. El Gobierno promete que el PIB real suba de 3.5% en 2001 a 5.1% en 2005; que el PIB per capita llegue hasta 2.7% y que el gasto social alcance 50% del gasto público total. Pero, ¿será eso posible?

En el 2004 la tasa inflacionaria superó el 9% y el inicio del año, con el tarifazo encubierto en el coste de la energía eléctrica, no da un buen augurio de que la situación mejore para el consumidor.

Más difícil aún será que la ERP cumpla otras relacionados con el desarrollo humano, en materia de educación y salud; con equidad de género y desarrollo sostenible.

Los esfuerzos de Honduras durante la década pasada para modernizar su economía y mejorar la gestión de sus políticas económicas y sociales impactaron en la reducción de la proporción de

(cont. ERP: una sociedad imaginada, cada vez más incierta)

familias con Necesidades Básicas Insatisfechas, pero en materia del PIB real per capita, hay factores estructurales aunados a desastres naturales, a la recesión internacional y a la crisis fiscal que han conspirado para reducir el crecimiento por debajo de lo esperado. Los pobres, en lugar de disminuir aumentan; y la pobreza en lugar de reducirse, se diversifica.

Bajo las actuales circunstancias cabe preguntarse de dónde saldrán los recursos necesarios para invertir en capital humano, reducción de la pobreza rural y urbana, protección social, sostenibilidad social y ambiental de la estrategia y promoción del crecimiento económico.

El problema, al menos uno de los más destacados, es que el alivio de la deuda, principal fuente de financiamiento, sólo será posible si el país cumple al pie de la letra las condicionales de la actual Carta de Intenciones y de otros cuatro o cinco más convenios de ese tipo, hasta cumplir el cronograma de condonación de 900 millones de dólares.

Mientras tanto, organizaciones como el FOSDEH, ASONOG o Popol Nathun (Tocoa), entre otras, siguieron afinando en el 2004 las propuestas regionales de reducción de la pobreza y promoviendo planes locales de desarrollo con amplio sentido participativo, a la espera de la liberación de los fondos o de que el Estado, con recursos nacionales, financie los programas y proyectos.

Pese a que ese esfuerzo de la sociedad civil es un gesto que mantiene abiertas las puertas al diálogo con el Gobierno, el año se cerró con una polémica decisión oficial de que el eventual financiamiento de la ERP sólo tomará en cuenta los PEDM (Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal) que tienen el visto bueno, en la práctica, de la Secretaría de Gobernación. La preocupación ciudadana es que los PEDM desconozcan todo el trabajo propositivo ya elaborado por las comunidades, lo que violentaría la recomendación de que las ERP respondan a visiones horizontales de la sociedad, en lugar de verticales.

El punto es que no se trata únicamente de “metodologías”, sino de enfoques sociales y económicos sustanciales. Mientras tanto, de acuerdo con el PNUD, el 20% de la población hondureña de mayores ingresos recibe 49.8% de los ingresos totales del PIB, mientras que el 20% de menores ingresos recibe 4.7%. Aún así, con tanta claridad, todavía hay quienes sostienen que la desigualdad sólo es responsable del 13% de la pobreza. ¿Quién cree ese cuento? ■

¿Qué hacen los bancos con el dinero de muchos?

Honduras ha iniciado el 2005 con depósitos ahorrados que representan alrededor del 52% del PIB, lo que causa preocupación puesto que es una masa monetaria que no genera producción.

En millones de lempiras hay más de 50 mil millones depositados en unas 815 oficinas bancarias a nivel nacional. De acuerdo con el FMI, hay un exceso de liquidez en la banca nacional, tanto en sus depósitos en lempiras como en dólares.

Pese a la liquidez, los préstamos siguen escasos para un amplio sector de los productores, sobre todo rurales y de la pequeña y mediana industria. Hay algunas excepciones en el sistema bancario, pero la mayoría sigue especulando con tasas de interés elevadas e inversiones sobre seguras.

El panorama del sistema bancario hondureño no ha cambiado, como algunos esperaban, con la apertura en el país de operaciones del Banco Cuscatlán (El Salvador) que previamente habría comprado la cartera del Lloyds Bank en Honduras.

La solicitud para operar como banco se presentó a finales del 2003 y el inicio de operaciones abiertas con el público fue en el último trimestre del 2004. Hasta ahora es un banco más, sin que marque una diferencia.

Esa situación, que ya pasó con Banistmo (BGA) puede que cambie este año con el Cuzcatlán, cuyos activos equivalen al total de los recursos de los 16 bancos hondureños activos.

La mujer en una difícil conquista de los electores

La población estimada en Honduras es de 6.7 millones de personas, de las cuales 3.2 son hombres y 3.4, mujeres. De la población femenina, al menos dos millones son mayores de 18 años y -por lo tanto- potenciales electoras. Se desconoce, sin embargo, cuántas forman parte efectivamente del padrón electoral para las elecciones internas y primarias del 2005.

La tendencia general en el análisis de la situación de la mujer, en tiempos electorales, suele concentrar la crítica con respecto a la desigualdad en el campo de los derechos políticos y civiles, sin embargo, el modelo, como sistema, promueve la desigualdad con respecto a la mujer y esa inequidad resulta de una construcción social de poder determinado.

Por ello conviene recordar que la base social y económica en que se sustenta la participación política de la mujer la coloca en desventaja con relación al hombre: 54% de las emigrantes del campo a la ciudad son mujeres; la cobertura en salud materna en las zonas urbanas es de 85% durante el embarazo, 61.7% en el parto y 38% en post parto y en las áreas rurales es más precario; 108 madres mueren por cada 100,000 nacidos vivos y la cifra aumenta en comunidades indígenas; más de 300,000 hogares del país están a cargo de mujeres con ingresos promedio inferiores respecto a los hombres jefes de familia; las mujeres son más vulnerables a las infecciones por VIH/SIDA, la educación de las mujeres se ve más afectada por la pobreza, los embarazos tempranos, la discriminación dentro de la familia y el acoso sexual, dentro y fuera del centro educativo, 0.4% de los títulos de tierra en el sector reformado han sido otorgados a mujeres y sólo 3% de las mujeres, son dueñas de medios de producción., una mujer con los mismos niveles de formación que un hombre, percibe de 20 a 36% menos de ingresos.

Ese contexto de país es congruente con la desigualdad en la participación política y social de las mujeres, que

representan, desde 1955, entre el 9 y 12% de los cargos de elección popular.

Las reformas impulsadas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, aprobada en 2004, no tomaron en cuenta el contexto social de la mujer, pese a que las condiciones de marginalidad y pobreza colocan nuevamente a ellas a la zaga de las preferencias electorales, pues poseen menos recursos que los hombres para promover su imagen, y al interior de sus propios partidos políticos encuentran tropiezos frente a actitudes machistas, autoritarias y verticales impuestas por los hombres. Esa misma situación afrontan en sus hogares.

En ese contexto, la expectativa de que las mujeres logren conservar, al menos una cuota de 30% de los puestos electorales, en los comicios de febrero próximo es muy incierta. Los dirigentes de los partidos políticos lo saben, pero no tienen interés real en cambiar el balance.

“Las mujeres deben trabajar como los hombres para ganarse los votos”, suelen decir los caudillos, pero aún trabajando el doble que los hombres las candidatas mujeres tienen menos posibilidades que ellos para ganar los cargos en disputa.

Lo único que, con el tiempo que falta para los comicios, que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos es que la población electora decida marcar preferentemente la casilla de las mujeres y les de un respaldo que les permita a ellas mayor capacidad de acción, negociación y liderazgo. La pregunta es: ¿será posible? ■

La democracia cojea de lo social

Honduras es un país que técnicamente mejora su sistema electoral, pero en un contexto de profundas y crecientes desigualdades, lo que hace que sus conquistas democráticas afronten múltiples amenazas y fragilidades. Muchos derechos civiles y sociales básicos no están asegurados.

El reto, por una parte, es que la clase política entienda que las reformas económicas no pueden seguir divorciadas de las reformas democráticas. Ese enfoque deberá estar presente en las propuestas electorales con vista a los comicios de noviembre 2005, pero no aparecen todavía en el discurso de los políticos.

La paradoja es que mientras el país sigue tratando de cumplir las condicionalidades externas que negocia, los conflictos y las carencias sociales se extienden a lo interno. Honduras tiene problemas que año con año se vuelven más graves y complejos y el 2005 no será una excepción.

La gravedad radica en la magnitud y persistencia de modelos con devastadoras consecuencias sociales, y la complejidad reside en la multiplicidad de causas asociadas con la pobreza y las desigualdades.

La crisis en lo social ha llegado a grados más allá de los tolerables, pero en los sectores de poder esa percepción no provoca cambios.

Sin duda, la mayoría de los hogares hondureños buscan sobrevivir, pero a costa de su desintegración, en el caso de los emigrantes, o del incremento de la participación laboral de mujeres y niños.

La estructura de la población, caracterizada por una población joven, se ve reflejado en una tasa de dependencia de 2.7 personas por trabajador.

En la categoría de mano de obra menor de 25 años, sin calificación profesional adecuada, hay 2,3 millones de habitantes que no están seguros de su futuro. Muchos piensan más en emigrar que en permanecer en el país.

Los aportes del FOSDEH en las mesas sectoriales o en las estrategias regionales de reducción de la pobreza confirman que hay diferentes tipos de pobres y pobrezas, aunque todas con un denominador común: hambre, privaciones, angustias, incertidumbres, desigualdades. El panorama es más complejo de lo aparente, tanto que hay pobres sin trabajo y pobres que trabajan. Aún dentro de las regiones donde actúa el FOSDEH hay pobres cuyo nivel de vida es “alto” comparado con pobres de otros lugares.

La Encuesta de Hogares (INE) habla de Hogares Muy Pobres (aquellos que tienen un ingreso inferior al costo de la canasta básica de alimentos. Constituyen la pobreza crítica o pobreza extrema), Hogares Pobres Relativos (su ingreso medio les permite satisfacer las necesidades de la canasta básica de alimentos pero no el conjunto de la canasta básica), Hogares En Pobreza (lo constituyen los hogares pobres y muy pobres, que tienen en común el no contar con el ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas) y los Hogares No Pobres (los que por su ingreso medio superan la línea de pobreza).

El INE informó en mayo del 2004 de un aumento de la pobreza del 2002 al 2003 en Honduras, que subió del 63,3 al 65,5%; de por sí alto, pero todavía por debajo de estimaciones no gubernamentales que lo ubican entre 72% y 82%.

Encuesta ya citada del INEL indicó que 63,5% de los hogares afrontan la pobreza porque sus ingresos no cubren la canasta básica de consumo familiar (de 62,20 dólares al mes). La canasta básica comprende unos 180 alimentos elementales, entre ellos, vestuario, vivienda, educación, salud, bienes y servicios, pero en la práctica se reduce a unos cuantos productos (maíz, arroz, frijoles, aceite, azúcar, entre otros).

El organismo oficial agregó que de los 6,7 millones de hondureños, 47,7% vive en condiciones de extrema pobreza con ingresos menores a 60 dólares al mes. Apenas 18,9% vive en una pobreza relativa, porque sus ingresos le permiten adquirir cada mes

una cantidad mínima de alimentos para sobrevivir. El INE estableció que la pobreza es más grave en el área rural, con un 70,2%, mientras que en la urbana se calcula en 56,3%.

En el 2004 el FOSDEH insistió en la urgencia de nuevas políticas económicas y sociales que ofrezcan oportunidades reales de superación a la población empobrecida. La forma más efectiva de negar la participación ciudadana es la pobreza, pero la respuesta parece limitada a la Estrategia de Reducción de la Pobreza, un plan más lleno de hojas que de tamal.

La clave sería potenciar los diferentes procesos alternativos que tienen lugar en muchas comunidades de Honduras, pero como su modelo contrasta con el neoliberal, entonces siguen en el anonimato y bajo presiones de sobrevivencia.

La ERP debiera estar priorizando el análisis alrededor de las mancomunidades que surgen tras objetivos claros, de los proyectos innovadores que capacitan en modelos sostenibles, de los planes de desarrollo a mediano y largo plazo que se formulan participativamente, de los esfuerzos de fortalecimiento de las capacidades locales o potenciando las redes formales e informales en producción, comercialización y ahorro que dan vida a la economía social. En fin, son tantas las experiencias de éxito que no hay justificación para ignorarlas.

Un punto a favor de Honduras es el crecimiento de su ciudadanía, aún en condiciones heterogéneas y dispersas, puesto que su capacidad de organizarse le permite no sólo acceder a recursos sino emplearlos debidamente. La ciudadanía alienta un proceso interesante de descentralización municipal al que se suman algunos políticos locales, creando un espacio común de planificación y ejecución bajo condiciones de mayor transparencia.

En el 2004 Honduras tuvo la bendición de no sufrir el impacto de tragedias naturales (inundaciones, huracanes, sequías prolongadas, etc), pero su vulnerabilidad es muy alta ante eventuales riesgos y en el panorama del 2005 surge amenazante el “Fenómeno del Niño”.

El país y no sólo las autoridades deben percatarse que la seguridad alimentaria es mínima para la mayoría de la población y que cualquier imprevisto negativo la derrumba.

En diversas regiones la falta de alimentos y recursos para comprarlos es grave, como en los municipios al sur de Tegucigalpa o los ubicados en zonas fronterizas. El hambre camina como migrante indeseable por todo el país. ■

¿Cómo sobrevivir en un año político?

El 2005 es un año cien por ciento político, y a esa certeza hay que tenerle miedo porque generalmente pesa más en lo negativo que en lo positivo en lo económico y social de Honduras.

El proceso electoral, en sus dos etapas: febrero y noviembre, consumirá más de 400 millones de lempiras, aportados por los contribuyentes nacionales y por la comunidad internacional. La pregunta es ¿cuál es la relación costo/beneficio de esa inversión para la sociedad hondureña?

Si esa interrogante se hace a los políticos, dirán que “la democracia es cara, pero es democracia”, pero si se pregunta a la mayoría del pueblo, la respuesta es que todos esos millones mejor debieran invertirse en hospitales, escuelas o en programas asistenciales.

Para el FOSDEH, sostener la democracia es una tarea fundamental, pero la mejor vía para lograrlo no es con grandes y onerosos gastos, sino haciendo que el sistema responda a las expectativas y demandas de la mayoría del país, no de grupos privilegiados.

En cualquier caso, el año político es una realidad, y lo primero que se confirma es que el último tramo de Gobierno de Ricardo Maduro estará marcado por el signo electoral.

Es probable volver a escuchar en los meses venideros un Maduro con aires proselitistas, como en el 2001 cuando hizo la propuesta electoral “Mi compromiso contigo” y que, tres años después, en el balance, tiene un pobre resultado.

Lo paradójico es que este aire proselitista no le servirá a Maduro en lo particular puesto que está fuera de la carrera electoral y del poder, sino que el cometido buscará ser ayudar a su partido político a ganar los comicios de noviembre. Sin embargo, ¿es esa la principal misión de Maduro o será, más bien, tratar de cumplir algunas de las reformas que prometió y quedaron en el vacío?

El problema, al menos uno de los principales, es que la Honduras del 2005 no es la del 2001, empezando por lo esencial: la imparable expansión de la pobreza, estimulada por la falta de equidad en la distribución del ingreso.

El país es hoy más pobre que antes pese a que la política pública oficial pregona tener en la Estrategia de Reducción de la Pobreza su preocupación social principal.

Se podrán manipular algunos indicadores, pero quién duda que el éxodo imparable de hondureños y hondureñas a Estados Unidos, arriesgando su integridad física y mental, confirma la crisis nacional y la imposibilidad de lograr, en el mercado nacional, mejoras sustanciales en el nivel de vida.

Los 600 mil migrantes que se calcula viven en Estados Unidos no pueden anotarse como un “éxito” social y económico de las administraciones liberales o nacionalistas o del modelo económico social vigente, pese a que el FMI ya incorporó sus remesas al Producto Interno Bruto, como si ese dinero fuese saldo de la reactivación productiva nacional.

Esos migrantes hablan de la desintegración nacional, de las diferencias abismales entre los que tienen mucho y los que tienen poco, de la desesperanza nacional.

Internamente, la riqueza generada, que es mucha, se ha concentrado en una minoría hiper privilegiada, la beneficiada con las facilidades arancelarias a la inversión extranjera, con las reformas al sistema financiero, con la apertura al capital

expansionista centroamericano, con la inseguridad existente o con la política de privatizaciones e impunidad.

Los “beneficiados” tienen nombres, apellidos e intereses muy conocidos en Honduras, y son, también, los que están financiando y controlando la política, convertida, hoy más que nunca, en una extensión de sus negocios.

Con ese panorama es difícil tener esperanzas en la calidad de cierre a su administración que tendrá Maduro o en los resultados del proceso electoral. No hay pregunta más difícil de contestar que la hecha por muchos ciudadanos: “¿por quién votar si todos son iguales?”.

¿Pepe Lobo?, si es el mismo Presidente del Congreso Nacional que repartió multimillonarias condonaciones o que nunca aprobó la reforma al Reglamento del Congreso Nacional; ¿Miguel Pastor?, si es el mismo Alcalde de Tegucigalpa que encareció la vida de los capitalinos para costear su ambición presidencial, ¿Mel Zelaya?, si es el mismo que dejó una estela de dudas en su gestión al frente del FHIS, ¿Gabriela Núñez?, si es la misma ex ministra de Finanzas que aprobó, sin contemplaciones, los paquetazos ordenados por los organismos multilaterales, ¿entonces, por quien votar?

Quizá esa no sea la pregunta adecuada que deben hacerse los hondureños. De repente es una trampa, hábilmente elaborada, hacer creer a toda la población que la agenda más importante del país es la de los políticos y no la de la ciudadanía.

Optar entre una u otra agenda cambia todo el panorama de la acción y la demanda en Honduras. Si la agenda de los políticos se impone, entonces efectivamente la discusión en el 2005 debe girar en torno a que candidato tiene la mejor canción, cuál aparece mejor perfilado en las fotografías, cómo memorizar el número de la casilla, cuál debe ser el color de la bandera del partido o dilucidar si deben ir los nombres o los apodos en la papeleta electoral.

En cambio, si la agenda ciudadana es la más importante, entonces despolitizar la administración pública se convierte en un reto básico, acompañado de políticas financieras, económicas y sociales que prioricen los intereses de la población mayoritaria y se basen en objetivos nacionales, no en los impuestos por el Tratado de Libre Comercio o aquellos que vienen de los organismos multilaterales de crédito.

Una agenda ciudadana tiene preocupaciones diferentes a la agenda de los políticos, dotando de contenido democrático las decisiones públicas. Ello posibilitaría las alianzas que necesita el país, estructuradas en base a objetivos nacionales en lugar de objetivos nacionales.

Para el FOSDEH, por ejemplo, una eficaz y supervisada ejecución del Presupuesto Nacional es clave puesto que no se puede quitar los ojos a los 75 mil millones de lempiras de que dispone el Gobierno en el 2005.

De igual forma el combate a la pobreza debe ser un eje transversal en la gestión pública y ciudadana, no una sumatoria de los proyectos de siempre que tienen los ministerios, y tampoco debe depender de eventuales desembolsos por la vía de la condonación de parte de la deuda externa.

Una verdadera estrategia de combate a la pobreza, además de combinar los enfoques nacionales con los regionales, debe incluir una estrategia eficaz de lucha contra la corrupción, de desarticulación del crimen organizado, de probidad en el uso de los fondos públicos, de generación de empleo con dignidad, de promover una seguridad que va más allá de la erradicación de las “maras” y de posibilitar al inversionista nacional reglas claras y oportunidades de crecimiento.

Una preocupación adicional, pero no menos importante, en este contexto es que cada día que pase en el 2005 el Gobierno será cada vez menos Gobierno. Después de los comicios de febrero, el candidato nacionalista oficial será el verdadero centro de poder y de atracción.

Alrededor del aspirante presidencial y no de Maduro es que se alinearán todos los funcionarios públicos, atizados por el deseo de no quedar fuera, de seguir dentro de la burocracia y

seguir siendo parte de los “políticos”.

Ese juego político electoral ha condicionado desde ahora, en buena medida, la actividad del Poder Ejecutivo, cuyos principales miembros se dividen entre uno y otro aspirante del nacionalismo. La división es patente, por ejemplo, el ministro Carranza (SOTRAVI) va con Pastor, y el ministro Hernández Alcerro (Gobernación) con Lobo. ¿A quién deberán, próximamente, su lealtad?

Técnicamente la mecánica electoral se ha vuelto más participativa, electiva y abierta, con una serie de acuerdos adoptados en el 2004, producto de intensas presiones ciudadanas e incluso de la cooperación internacional. Pero en contenidos impera más el atraso que la modernidad.

Por ejemplo, en mayo de 2004 fue aprobada una nueva Ley Electoral y de los Partidos Políticos que ratifica la obligatoriedad de establecer en las planillas electorales de los cinco partidos políticos inscritos, 30 % como mínimo de mujeres a los cargos de elección popular. A la hora de las horas, esa obligatoriedad fue incumplida por la mayoría y cabe temer que después del 20 de febrero el porcentaje será aún menor.

Como muchas reformas políticas, esa “apertura” a la mujer no es tan abierta como se deseaba. Si en las elecciones primarias las mujeres no son favorecidas por el voto, tendrán que ceder sus puestos a los hombres. Lo correcto hubiese sido reservar el 30% de los escaños legislativos como cupo para candidatas mujeres, tomando en cuenta que las mujeres no compiten en iguales circunstancias que los candidatos hombres, sino que remontan asimetrías históricas y desventajas actuales, entre ellas no disponer de los recursos necesarios para promover campañas de mayor impacto entre el electorado.

Pero la apertura nunca es el objetivo real del sistema, por eso las reformas se quedan a medias, inconclusas. Retomar el verdadero rumbo del debate político se convierte en una meta insoslayable, pero ¿podrá hacerse efectiva?

Lo tangible por el momento es que de ningún candidato se conoce una propuesta a fondo para afrontar con éxito los problemas nacionales. Las iniciativas son más de lo mismo: mano dura, mayores penas a los delincuentes, maquila, turismo, zonas libres agrícolas, en fin, la misma medicina de los últimos 15 años.

Mientras tanto queda la duda sobre qué hacer con la crisis económica, el fenómeno de la migración, la violencia juvenil, empleo, subempleo, empleo precario, seguridad ciudadana, integración centroamericana, etc.

De nuevo, como en procesos anteriores, cuesta precisar las diferencias entre los candidatos favoritos de ambos partidos. Pese a ello, en el corto plazo, las decisiones nacionales estarán influidas por el proceso electoral que culminará en noviembre del 2005, período que abre una coyuntura favorable a la negociación y la propuesta, pero cada vez en mayores condiciones de incredulidad.

Con los principales operadores de la política incapaces de reformar, desde adentro, la política, surge para el FOSDEH la necesidad de articular, desde la perspectiva ciudadana, un Pacto de Gobernabilidad entre los partidos y aspirantes presidenciales que reimpulse la transición democrática iniciada en 1980, reduciendo la crisis de la política, promoviendo nuevas reformas de Estado, vinculando el modelo económico vigente con la democracia y esclareciendo las prioridades nacionales en el contexto de una Globalización (TLC CA-EUU, Plan Puebla Panamá y otros) más amenazante que esperanzadora.

En ese cuadro resulta claro que el país requiere de un Estado fuerte, capaz de guiar la nación hacia objetivos estratégicos de consenso, pero en la práctica se dispone de un Estado débil al que corresponde un Gobierno débil y, también, una ciudadanía débil. El consenso se reclama, pero es complejo concretarlo puesto que implica sentar a la mesa sectores en pugna o con profundas diferencias. El reto es que en el acuerdo inevitable el balance entre ganadores y perdedores sea equilibrado. ■